

El Socialismo en la Argentina del Siglo XXI

Presentación

Inés Bertero

Presidenta de la Fundación Estévez Boero

Desde su nacimiento en 1896, el Partido Socialista desarrolló una importante labor en el plano político, económico y social en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sectores medios de nuestra sociedad.

Desde 1930 como resultado de los golpes de estado, se inició una historia de desencuentros entre las mayorías nacionales de la que no estuvo ajeno el Partido Socialista. La incompreensión de las razones históricas por las que el peronismo significó un avance en la incorporación de los sectores más postergados de nuestra sociedad a la ciudadanía efectiva mediante la acumulación de los derechos civiles, políticos y sociales, abrió un período de profunda crisis en el Partido, que lo terminó llevando a la decadencia por el camino de las divisiones internas.

La decisión de un conjunto de jóvenes liderados por Guillermo Estévez Boero de crear un Partido que actuara como puente entre las ideas socialistas y la realidad nacional, que sumara a la unidad de las mayorías nacionales en torno a un proyecto de país y avanzara en la construcción de una sociedad más justa, marcó el renacimiento del socialismo en Argentina. Desde 1972, cuando se inició esta experiencia con la creación del Partido Socialista Popular, hasta el año 1989 en que se accedió al gobierno de la ciudad de Rosario, fueron años de militancia, de estudio y de capacitación. Aquí se volcaron muchas de nuestras propuestas para iniciar un camino de cambio.

Este año se cumple un cuarto de siglo de vigencia ininterrumpida de la democracia en Argentina. Esta continuidad institucional se da junto con un creciente deterioro en las condiciones de vida de nuestra sociedad: la exclusión social creciente, el retroceso económico y la inseguridad, aparecen como "promesas incumplidas" de la democracia ahondando la crisis de representatividad de los partidos políticos por su falta de respuestas.

El Partido Socialista, al ganar las elecciones de 2007 en Santa Fe en el marco de una coalición de partidos, ha despertado un rayo de esperanza en la posibilidad de una alternativa política superadora de la actual realidad. La construcción de caminos alternativos requiere del estudio para poder proyectar entre todos las reformas necesarias.

Esta publicación se enmarca en nuestro objetivo institucional de contribuir a la elaboración de propuestas orientadas a la promoción de los valores de libertad, solidaridad e igualdad como realización práctica de las ideas socialistas

Hermes Binner

Gobernador de la Provincia de Santa Fe

A principios de este año comenzamos a discutir las bases de un documento político partidario que ahora estamos presentando, convencidos de la necesidad de jerarquizar la organización partidaria como instrumento vital en la democracia.

La elaboración de este documento implica volver a las fuentes, volver a pensar la política, la organización partidaria, el Estado y la sociedad en general. Tarea que resulta imprescindible para comprender la complejidad de la nueva realidad social y para elaborar políticas que puedan resolver satisfactoriamente los problemas contemporáneos.

Recurriendo a un mecanismo de participación amplio, se fueron realizando distintas reuniones y debates que culminaron en asambleas multitudinarias de compañeros y compañeras que se concretaron en las cinco regiones en las que estamos reorganizando política y territorialmente a la provincia de Santa Fe. Así, en el mes de abril y, de manera casi simultánea, compañeros del partido, simpatizantes y allegados, se reunieron en Reconquista, Santa Fe, Rafaela, Rosario y Villa Cañas, para deliberar sobre ese interrogante que atraviesa todo el documento y define su sentido: Qué significa ser socialista en la Argentina del 2008.

Estamos convencidos de que la mejor manera de ser fieles a este carácter colectivo del documento, es no considerarlo como un texto cerrado, sino más bien como una propuesta de discusión, no sólo para los compañeros y compañeras del partido, destinatarios de este texto, sino también para otros actores de la vida política y de la sociedad civil en general, preocupados como nosotros por resolver los dilemas de la Argentina y avanzar decididamente en la construcción de una sociedad de bienestar.

La Argentina está viviendo momentos que pueden ser decisivos para el futuro de nuestra sociedad. La conflictividad social y política de estos días deja al desnudo los problemas de calidad institucional que padecemos. Este déficit institucional del sistema político afecta las capacidades de la democracia para resolver los dilemas sociales que condenan a vastos sectores de nuestra sociedad a la pobreza y la exclusión.

Los socialistas no debemos eludir nuestras responsabilidades a la hora de jerarquizar la institucionalidad de la democracia argentina. Estamos convencidos, como nos decía Guillermo Estévez Boero, de que lo que es bueno para la nación es bueno para el socialismo y viceversa. Tenemos para esto responsabilidades de gobierno, tanto ejecutivas como legislativas, en las que debemos poner todo nuestro entusiasmo. Y tenemos también responsabilidades como hombres y mujeres de partido. Por ello debemos esforzarnos por mejorar la calidad institucional de nuestras organizaciones, con la certeza de que estaremos así contribuyendo a la consolidación de un sistema de partidos sin el cual la democracia argentina no podrá superar el rasgo de incertidumbre que hoy la caracteriza.

· **El Socialismo en la Argentina del Siglo XXI**

1. Una visión más amplia para repensar la Argentina
2. Pasado y presente
 - a. Las promesas incumplidas de la democracia
 - b. Las reorientaciones recientes
3. El Socialismo en el gobierno
 - a. Rosario enciende la luz para cambiar
 - b. Un proyecto socialista para reformular el Estado y la sociedad
4. Partido y coalición de gobierno
 - a. La crisis de los partidos
 - b. El socialismo del siglo XXI
 - c. Partido y coalición de gobierno
5. Epílogo: recuperando la política

1. Una visión más amplia para repensar la Argentina

Para entender la Argentina actual es necesaria una visión amplia y compleja que nos facilite la comprensión de una realidad que ha cambiado de manera significativa en los últimos años. La antigua Argentina, en la que el trabajo y el esfuerzo posibilitaban el ascenso social, ya no existe. La pobreza y la marginación se han transformado en elementos estructurales de la realidad. Esa pobreza también alcanza a las propias instituciones estatales y a los partidos políticos que ingresaron hace unos años en una profunda crisis que aún no han podido superar.

Una situación nacional tan compleja requiere de una respuesta igualmente compleja con capacidad para dar cuenta del todo. Para esto necesitamos: (1) ubicar el presente en su justo contexto histórico, a fin de dimensionar correctamente la situación actual; (2) reconocer las alternativas de gestión política que nosotros mismos hemos construido en los años recientes; y (3) pensar los dispositivos organizacionales que son necesarios para la ambiciosa empresa de reconstruir el tejido social argentino, de construir, en fin, una sociedad justa.

2. Pasado y presente

A las puertas de cumplir un cuarto de siglo de recuperación de la institucionalidad democrática y habiendo vivido en este período acontecimientos y procesos que transformaron el rostro de la Argentina (la sociedad, el Estado y el sistema político), es necesario revisar el camino recorrido, los logros y los fracasos, con el fin de precisar el punto en el que estamos situados hoy y definir un horizonte deseable para nuestra sociedad que, a la manera de agenda política, guíe nuestro accionar en los próximos años.

La implosión del poder militar como consecuencia de la derrota de Malvinas en 1982, abría las puertas a una transición a la democracia que, más allá de las ilusiones y los desencantos de sus años iniciales, se revelaría como un verdadero parteaguas en el proceso histórico argentino. En efecto, con la agonía del poder militar se iniciaba una etapa inédita en la historia nacional de continuidad institucional con democracia electoral y alternancia política.

Terminaba entonces un largo proceso caracterizado por la presencia del poder militar en el sistema político. El golpe de estado que el 6 de septiembre de 1930 derrocaba al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, había inaugurado una nueva época en la cual las fuerzas armadas se transformarían en un actor decisivo del sistema político, presentándose como una alternativa a las organizaciones partidarias e impidiendo la construcción de un sistema político estable y duradero.

En esas cinco décadas, se irá configurando un poder militar que en diferentes combinaciones habrá de integrar a las fuerzas armadas con sectores civiles, políticos, sindicales y religiosos. La presencia de este poder militar en la política asumirá diferentes roles, desde la tutoría ejercida sobre las organizaciones partidarias circunstancialmente a cargo del gobierno nacional, a la intervención directa. A partir del golpe de estado de 1966, bajo el paraguas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el poder militar incrementará su involucramiento en el campo político hasta llegar al paroxismo del golpe de 1976 y la instalación del terrorismo de Estado. Los golpes de estado revelan en su desarrollo histórico una constante perversa: impedía la consolidación de la participación popular y de la institucionalidad democrática, mientras provocaban drásticos cambios en la orientación de la economía, en detrimento de los sectores populares, que afianzaban los procesos de concentración y penetración del capital internacional. Así, como Sísifo, el proceso de construcción de una democracia institucional debía recomenzar de cero luego de cada golpe.

Así, bajo el imperio de la inestabilidad provocada por los golpes de estado, se fue afectando notablemente el desarrollo económico y social de nuestro país, en especial en los últimos años del período. Como consecuencia, la Argentina perderá esa privilegiada condición que le permitía destacarse en América Latina no sólo por el crecimiento económico, sino también por el alto nivel de inclusión social y de desarrollo cultural.

A pesar de esta larga participación militar en la historia argentina, el nivel de violencia y agresión a la sociedad de la dictadura militar de 1976 resulta inédito. Partiendo de un diagnóstico que considera a la sociedad presa de una enfermedad irrecuperable, el gobierno militar

encabezado por Videla aplica una intervención sostenida en el ejercicio del terrorismo estatal, con el objetivo de paralizar a la sociedad y cualquier respuesta posible de la misma ante sus políticas, lo que le permitiría avanzar en una drástica transformación del sistema económico con el propósito último de modificar radicalmente la conformación de la sociedad argentina.

El resultado de tan brutal intervención militar es conocido: desaparecidos, exiliados externo e internos, y una sociedad desarticulada no sólo por el temor ante la arbitrariedad del poder dictatorial sino también por la crisis económica que jaqueaba las certidumbres de la Argentina industrial.

Lo que implosionaba en 1982, bajo la sombra patética de Galtieri, era la más brutal dictadura de la historia de la Argentina moderna; y a la par caía un sistema político que durante poco más de cincuenta años había funcionado con la centralidad de los hombres de armas y la subordinación del poder civil. Esta coincidencia terminal entre la historia reciente de los años de la última dictadura, y la de más larga duración, que remitía a 1930, contribuía a hacer más pesada la tan de reconstrucción de la sociedad y cargaba de dramatismo a la agenda de la transición a democracia.

2.a. Las promesas incumplidas de la democracia

Desde los primeros años de la transición, pueden percibirse ya los principales temas que funcionarán como grandes ordenadores de la política del último cuarto de siglo. (1) La política derechos humanos y el poder militar residual, que encuentra sus luces en el juicio a las juntas militares y sus sombras en las leyes de obediencia debida y punto final, y poco después en I indultos. (2) La política económica nacional frente al fenómeno de la globalización y la crisis de deuda externa, cuyos datos más duros remiten a las crisis de 1989/1991 y 2001/2002. Y (3) la crisis del Estado y las alternativas de reforma, que luego de los intentos frustrados de los años ochenta promovió en los noventa un verdadero desmantelamiento del aparato estatal, a partir de una política de privatizaciones que fue una de las marcas principales del fenómeno menemista. En definitiva, en este período y en especial en los años noventa, tuvo lugar en la Argentina una transformación de la sociedad impensada apenas unos años antes. Impensada no sólo por la dirección y profundidad de los cambios, sino también por la rapidez y la falta de resguardos con que se produjeron. Se puso entonces en crisis una forma de entender la sociedad, la economía y la política que había sido la predominante a lo largo de la mayor parte del siglo XX, cuando la sociedad se organizaba sobre dos pilares fundamentales: el modelo estatal de base keynesiano y el sistema fordista de producción.

Por supuesto que varios acontecimientos importantes de la historia argentina reciente permiten una mirada optimista del proceso de democratización inaugurado en 1983, aunque pueden resultar insuficientes frente a la suma de los que justifican el desencanto y el malestar. Este desencanto y malestar ha alimentado la más severa crisis de representación política, que encontró su epicentro en la caída del gobierno de De la Rúa y que aún no ha concluido, recorriendo un curso por el momento más sereno.

La principal causa de este malestar remite a las limitaciones de la democracia política frente al deterioro de las condiciones sociales de nuestro país. Dicho de otra manera, la democracia política no ha sabido modificar una tendencia al deterioro de las condiciones sociales cuyos indicadores actuales devalúan de manera notable el proceso de democratización. Hasta la recuperación de la democracia en 1983 el deterioro de las condiciones sociales se asociaba correctamente a los procesos dictatoriales; la incapacidad de nuestro sistema democrático para revertir esta situación en los últimos 25 años, afecta directamente su legitimidad social.

No ignoramos que estamos ante un problema que en parte trasciende las fronteras nacionales: las limitaciones de la democracia política y de los Estados nacionales frente a los imperativos económicos de la globalización. Precisamente uno de los cambios más importantes de la evolución reciente del capitalismo, es la profunda mutación que se ha producido en la relación de la política con la economía, de los Estados nacionales con los mercados. Desde el

siglo XIX, la política (el Estado) funcionaba como ordenadora del mercado. Esta capacidad de la política para ordenar al mercado se ve seriamente limitada a partir de las últimas décadas del siglo pasado, y es una de las características decisivas del fenómeno de globalización.

Una de las marcas más severas del proceso de recuperación democrática en Argentina (y en América Latina en general) es que el mismo se ha producido bajo el imperio de esta nueva realidad signada por la retracción del Estado ante el mercado. Sin embargo, sobre ese piso común, cada caso nacional da muestras de claras diferencias que explican que esa resignación de la política ante la gestión es también una cuestión ideológica. Es el resultado de una batalla cultural en su momento ganada por el neoliberalismo, que prohió una verdadera furia antiestatista, cuyos resultados con respecto a las capacidades del Estado para cumplir sus funciones básicas aún estamos padeciendo los argentinos.

En ese registro, que fue el del justicialismo en su larga estación menemista, el Estado era un mal necesario que debía adecuarse al modelo económico bajo el imperio del mercado y la globalización. El brutal desmantelamiento del Estado que se dio en esos años en Argentina (los casos de las privatizaciones de YPF y de Ferrocarriles son emblemáticos), sólo fue posible por la eficaz campaña de deslegitimación del Estado previo a las reformas; el viejo Estado social criollo cuyo disfuncional gigantismo e incapacidad para responder a los dilemas de la modernización facilitaron enormemente la tarea de los apóstoles del Estado mínimo y el endiosamiento del mercado. Bajo el paradigma del Consenso de Washington, las tecnocracias de las instituciones financieras internacionales imponían la necesidad de avanzar en la reformulación del Estado en lo que llamaban la segunda ola de reformas estructurales, luego de la primera ola de las reformas económicas neoliberales.

Las consecuencias de este proceso de reforma estatal fueron dramáticas, tanto en lo social como en lo político y en lo económico. La radical transformación de la sociedad argentina del último cuarto de siglo ha provocado un inédito deterioro social que configura una nueva Argentina socialmente hablando. Esta nueva realidad determina negativamente las condiciones sociales de la democracia y las posibilidades de construir ciudadanía no sólo civil y política sino también social y cultural. A lo largo del siglo XX, más precisamente hasta mediados de la década del setenta, la Argentina se recortaba en América Latina como una sociedad donde la desigualdad propia del sistema capitalista estaba disimulada por una fuerte movilidad e integración social, lo que terminaba por conformar un entramado social más democrático que el de los países vecinos. En ese período, la economía nacional atravesó diferentes etapas sin que se detuviera el crecimiento económico y social. Por supuesto que algunos fenómenos se presentaban anticipadamente como señales de alarma. En especial: (1) las dificultades para encontrar una inserción eficaz en el mercado mundial luego de la crisis del 30, lo que se verá confirmado una y otra vez después de la Segunda Guerra Mundial; y (2) lo que hoy llamaríamos la falta de sustentabilidad del desarrollo, que dará lugar a los rostros más duros de la economía argentina de los últimos 50 años: la inflación y la deuda externa. Más allá de esas señales de advertencia de la economía, las tendencias a la equidad social y las posibilidades de ascenso no se revirtieron hasta mediados de la década de 1970.

El quiebre de esta tendencia de la economía argentina se produce a mediados de esa década del setenta con lo que se conoce como el Rodrigazo, el plan económico implementado por Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Perón, que anticipó lo que luego, ya en la dictadura militar, sería la política de Martínez de Hoz. El rodrigazo es el huevo de la serpiente del neoliberalismo en un gobierno de origen popular. Empezará entonces un proceso que habrá de cambiar el patrón de distribución de la Argentina y en pocas décadas logrará terminar con la movilidad social que caracterizaba a nuestro país como una sociedad inclusiva.

Lo sucedido en este aspecto en las últimas décadas no puede ser más desfavorable. Basta revisar los índices de desempleo, pobreza e indigencia para comprender rápidamente de qué estamos hablando; y lo más grave es el nivel alcanzado por la desigualdad, que resulta más sorprendente en una sociedad con la riqueza y la historia de la Argentina. Peor aún, hemos aprendido en estos últimos años que el deterioro de las condiciones sociales tiene una notable capacidad de reproducción; que no estamos ante un fenómeno pasajero que podría revertirse

gracias al mero crecimiento económico, sino que se transforma rápidamente en un indicador estructural que nos revela una nueva Argentina.

En definitiva, en el proceso de reconstrucción democrática vivido desde 1983 hasta la fecha, la Argentina ha logrado construir un régimen político democrático, pero tiene una importante asignatura pendiente si de lo que se trata es de construir una democracia plena, que incluye como un ingrediente fundamental el régimen político pero que no se agota en él.

2.b. Las reorientaciones recientes

Luego de la crisis del 2001, la visión destructora del Estado característica de los noventa ha perdido relevancia en la política nacional, en una reorientación más general de la política latinoamericana. Esto resulta alentador y facilita la reversión de la tendencia al deterioro de las condiciones sociales, ya que reinstala la preocupación por las capacidades estatales para definir políticas públicas, en un momento económicamente favorable para nuestro país ante el cambio de las condiciones del comercio internacional.

Sin desconocer la importancia que tiene este proceso de reorientación del Estado, hay que señalar que, en general, se trata de reformas parciales, fragmentadas, que buscan dar respuesta a problemas puntuales sin una concepción política de conjunto, sin una visión del Estado que es necesario reconstruir luego del neoliberalismo. Estas reformas puntuales de los últimos años no han apuntado a construir un nuevo modelo de relación entre Estado y sociedad. Se corrigen problemas parciales, generando un mínimo aparato de Estado ahí donde no existía, o corrigiendo la relación con el mercado de acuerdo a las nuevas tendencias económicas, pero sin plantearse un nuevo horizonte para lo estatal.

A su vez, el caso argentino revela otras insuficiencias que es necesario señalar. En especial, la deficitaria calidad institucional de este proceso de reorientación estatal, en el que se mantienen los peores vicios del decisionismo político que caracterizó a los años noventa, cuyos signos más caros se reflejan en dos esferas de relaciones: del poder ejecutivo y el parlamento, por un lado; y del poder nacional y los Estados subnacionales, por otro. Un parlamento subordinado al poder ejecutivo y el deterioro del federalismo frente al poder central son posiblemente dos caras de la misma moneda. Es difícil pensar que la concentración de recursos por parte del Estado nacional en detrimento de las Provincias, en una magnitud que justifica hablar de federalismo invertido, hubiera sido posible sin la resignación del rol constitucional por parte del parlamento y en especial del senado de la nación.

Este deterioro institucional es también una consecuencia de la crisis de los partidos políticos argentinos. El universo de las organizaciones partidarias tiene en la Argentina de hoy un centro paradójico, en tanto está ocupado plenamente por una fuerza política, el Justicialismo, poco permeable a aceptar el formato del partido político como su dispositivo de organización. Antes bien, el Justicialismo se revela hoy como una estructura política paraestatal que va cambiando de manos y contenidos (de Menem a Kirchner, pasando por Duhalde) sin desafectar en lo esencial su relación con los sectores populares. Una relación con los sectores populares que es electoral, por cierto, pero es también identitaria.

Más allá del Justicialismo, tenemos una miríada de pequeños actores. En especial algunos bloques con cierta importancia que remiten a retazos de la tradición partidaria Radical. Estos grupos fragmentados son resultado de una lenta pero sostenida pérdida de representación popular por parte del Radicalismo, de la mano de los fracasos institucionales cuando le tocó gobernar y en especial de las dos grandes crisis recientes (1989 y 2001) que terminaron con los gobiernos de este partido. El Radicalismo mantiene una relativamente importante representación institucional (parlamento, gobiernos provinciales y municipales), pero la fragmentación, la vulnerabilidad frente a la cooptación del Kirchnerismo, y la falta de credibilidad ante la opinión pública condicionan seriamente sus capacidades para ofrecer una alternativa a la sociedad.

El ARI ocupó en los últimos años un espacio de cierta importancia en la política argentina, no tanto por su fuerza institucional sino por su capacidad de llegada a la opinión pública, en especial a partir del liderazgo de Carrió. Los cambios de su principal referente en las últimas elecciones, la creación de la Coalición Cívica y el alejamiento mismo de Carrió de las filas del ARI, tan puesto a esta fuerza política en una crisis cuyo resultado es difícil de predecir en la actualidad. Paralelamente, en la ciudad de Buenos Aires ha crecido el liderazgo de Macri a partir de su triunfo en las elecciones municipales. Como en el caso de Carrió estamos ante una fuerza política sostenida casi exclusivamente en un liderazgo personal. Seguramente el derrotero del macrismo pasará por construir una oposición por derecha al actual gobierno, tratando de ampliar su área de influencia más allá de la ciudad de Buenos Aires, en acuerdo con ciertos sectores de la derecha tradicional, tanto del Liberalismo como del Justicialismo.

En este horizonte partidario la situación del Partido Socialista es singular. Una de las pocas fuerzas con una larga tradición histórica, que tiene una importante base territorial y que ha crecido sostenidamente en los últimos años. A su vez, esa base territorial, primero municipal, con Rosario y otras ciudades más pequeñas, y ahora provincial, con la gobernación de la provincia de Santa Fe, le permiten al Socialismo un ejercicio de gobierno a partir del cual construir, paso a paso, una alternativa para ofrecer a la sociedad.

Precisamente el Socialismo es hoy el núcleo principal del Frente Progresista Cívico y Social que gobierna la provincia de Santa Fe desde el 11 de diciembre de 2007. Nuestra provincia no ha sido una excepción en el país en las últimas décadas. Por el contrario, gobernada por el Justicialismo desde 1983 y hasta diciembre pasado, la provincia reprodujo más o menos paso a paso lo que sucedía en el plano nacional. Fundamental en lo que hace a la política de abandono del Estado que caracterizó al neoliberalismo de los años noventa, con las privatizaciones sin resguardo de las principales empresas estatales de la provincia.

Un dato diferente con el contexto nacional puede encontrarse en los ajustes del sistema político ante el estallido de la crisis de representación del 2001. En este sentido, las constricciones institucionales operadas sobre el sistema electoral con la ley de lemas, permitieron al poder político imperante en la provincia desde 1983 demorar la resolución de la crisis por un período gubernamental. El abandono de la ley de Lemas permitió en el 2007 el triunfo electoral del Frente Progresista como una respuesta demorada a la crisis de representación del 2001.

3. El Socialismo en el gobierno

En los últimos años se ha vuelto casi un lugar común afirmar que Rosario es una ciudad distinta, tanto en el contexto provincial como nacional. Esta cualidad distintiva de Rosario es, en gran parte, resultado de políticas diferentes sostenidas en el tiempo, a lo largo de más de 15 años de gobierno socialista. Políticas que se acercan a lo cotidiano, porque sin cercanía no hay afecto; y a la vez tienen la distancia de la imaginación, porque sin imaginación no hay cambio.

3.a. Rosario enciende la luz para cambiar

Rosario tiene, como todas las ciudades latinoamericanas, problemas de pobreza y desigualdad. Sabemos que las políticas públicas locales, sociales o urbanas, son insuficientes para terminar con la desigualdad, cuyas causas profundas remiten al modelo económico. Sin embargo, desde la experiencia de Rosario se pudieron revertir viejas prácticas de personalismo y clientelismo y avanzar hacia una perspectiva de derechos.

El descompromiso del Estado Nacional en los 90, se reveló sobre todo a través de su retiro de la intervención social. Las políticas de ajuste estructural que desmantelaron las instituciones de bienestar del Estado Nacional, obligaron a los municipios a hacerse cargo de las protecciones sociales, con los límites derivados de su falta de autonomía y de recursos presupuestarios. En ese marco, el gobierno socialista de Rosario, lejos de achicar el Estado lo fortaleció, a través de una planificación estratégica que promovió importantes transformaciones socioculturales, descentralización y proximidad del Estado local, participación de todos los sectores sociales y

potenciación de las capacidades de la comunidad.

Desde Rosario entendimos que no puede haber nuevos contenidos sin imaginar formas nuevas. La innovación implica un fuerte ejercicio de imaginación y de coraje para atreverse a cambiar viejos paradigmas; implica además una construcción desde abajo, un cambio cultural asentado en valores. No hay buen gobierno posible sin compromiso ético y social.

Por eso el camino lo abrió el modelo de salud, solidario y participativo, con el compromiso de acceso universal a la salud pública, bien escaso en aquellos años de privatización del bienestar. Y pensar la ciudad a la medida de los niños, porque lo que pensemos y hagamos por los niños y los jóvenes habla de quiénes somos y lo que esperamos como sociedad.

La descentralización municipal, eje del gobierno socialista en Rosario, no fue sólo una reforma de carácter administrativo, sino por sobre todas las cosas una excelente oportunidad para comenzar a revertir los grandes desequilibrios, abordar gradualmente las situaciones de carencia, potenciar las situaciones más favorables e impulsar nuevos desarrollos. El proceso de descentralización y modernización del Estado municipal permitió marcar una tendencia: Rosario una sola ciudad; haciendo más eficaz la gestión para dar solución a los problemas comunitarios mediante un acercamiento del ciudadano al Estado. Implicó también un cambio de cultura que se extendió a toda la estructura municipal y a los vecinos y vecinas de la ciudad. En Rosario se puede comprobar que la descentralización terminó con el viejo esquema donde los funcionarios decidían las acciones de gobierno encerrados en su gabinete, dando lugar a una nueva modalidad donde los funcionarios, entendidos como verdaderos servidores públicos, deben recorrer el territorio y adoptar decisiones en forma responsable y adecuada a la realidad y a las percepciones de los ciudadanos.

La descentralización es, además, un escenario indispensable para promover la participación. La experiencia realizada demuestra que siempre es positivo abrir espacios, transmitir a la gente que puede decidir y no sólo escuchar o levantar la mano, que es posible recuperar la confianza. Como socialistas tenemos la obligación de impulsar procesos de participación, abrir espacios, invitar a la gente a compartir un esfuerzo social y solidario. La participación bien entendida distribuye poder, no anárquicamente ni de cualquier forma, sino con reglas claras. Así lo demuestra la experiencia de Presupuesto Participativo en Rosario, que no sólo permite que las políticas del gobierno incorporen las prioridades marcadas por los propios vecinos, sino y aún más importante marca un antes y un después en la conciencia de la ciudadanía que luego se transmite al tejido social e institucional.

En Rosario también hemos aprendido que los espacios públicos tienen un carácter universal e igualador. La emblemática acción de recuperación del espacio público junto al río o los edificios de los Centros Municipales de Distrito, hacen palpable la idea de que todos los ciudadanos, aun los más humildes, tienen derecho a la belleza y armonía de esos espacios comunes. El uso del espacio público es educativo, nos permite aceptar obligaciones y compromisos y practicar «el arte de vivir juntos unos con otros».

La cooperación social y la integración entre ciudadanos con el objetivo de la inclusión social han constituido el eje de políticas verdaderamente transformadoras, tales como el Rosario Hábitat o la experiencia innovadora de la agricultura urbana. Estas son políticas que apuntan a promover las mejores capacidades de las personas, a recuperar su dignidad a través del trabajo y la mejora de las condiciones de vida, y no a través de dádivas que refuerzan la exclusión y la vulnerabilidad.

Todo esto hicimos desde la gestión socialista de una de las ciudades más importantes de la Argentina y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en la provincia de Santa Fe. La transformación de los métodos, con funcionarios que escuchan y ciudadanos que participan activamente, la recuperación de la confianza en que a través de la política se pueden obtener resultados concretos y palpables en la calidad de vida, permitirán reconstruir los vínculos entre

ciudadanos y gobernantes. La planificación estratégica, la descentralización y la participación son los instrumentos claves del gobierno progresista de la provincia de Santa Fe, que harán protagonistas a los vecinos de nuestras ciudades y pueblos.

3.b. Un proyecto socialista para reformular el Estado y la sociedad

Las acciones puntuales que dan sustento a los años de gestión municipal en Rosario y marcan el rumbo de los primeros días del gobierno provincial de Santa Fe, se inscriben en un proyecto más amplio que le da sentido a la acción gubernamental de la coalición política que integramos los socialistas, definiendo un horizonte progresista para orientar el desarrollo de la sociedad. En la definición de ese horizonte, partimos de dos premisas fundamentales: un mayor bienestar para la sociedad y un mejor Estado para todos.

El concepto de bienestar alude a una situación colectiva de satisfacción de necesidades. No se trata de una adquisición personal sino de un proyecto de organización social que estructura y da sentido al porvenir de una sociedad. Es una construcción colectiva que se forja en el ámbito público, sobre la base de valores compartidos por la sociedad. Además, el sentido político del término hace referencia no sólo a la satisfacción de una necesidad inmediata, sino a la proyección en el futuro de esa capacidad de satisfacer las necesidades. Es decir, cuando se satisfacen las necesidades y se prevé que éstas seguirán siendo satisfechas en el futuro, lo que implica un adicional de seguridad.

Estrechamente asociado al paradigma del Estado Benefactor, el imperativo del bienestar social ordenó el desarrollo del capitalismo en la segunda posguerra dando sustento a uno de los círculos virtuosos más notables de la economía capitalista. En ese registro, ponemos el acento en el concepto de Sociedad de Bienestar, lo que implica recuperar una parte fundamental del paradigma del Estado Benefactor, como es la universalidad, pero desde una mirada diferente a la predominante en las décadas del cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado. Una mirada que demanda una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad. Que jerarquiza el valor de lo público, de la participación ciudadana y el rol de las iniciativas sociales, tratando de contrarrestar tanto el paternalismo estatal, que acompañó al desarrollo de los Estados Sociales en nuestra región, como el reino del mercado de los años noventa.

A diferencia de la sociedad en la que vivimos, donde la exclusión social aparece como un rasgo estructural, una sociedad de bienestar encuentra su principal fundamento de legitimidad en su capacidad inclusiva.

Como podemos apreciarlo en los últimos años de sostenido crecimiento económico de nuestro país, el carácter inclusivo de la sociedad, la posibilidad de construir una sociedad de bienestar, no es algo que tenga que ver con la naturaleza, ni es inherente al desarrollo del mercado. El bienestar de una sociedad es el resultado de una acción política, y esa acción política puede dar este resultado deseado, en la medida que cuente con los instrumentos adecuados tanto en el territorio de lo estatal como en el de la sociedad.

Es por esto que resulta fundamental transformar al Estado, jerarquizar la calidad de sus instituciones. Luego de la tremenda aventura de los años noventa es necesario repensar el Estado, tanto en el plano provincial como nacional.

Nuestra política de gobierno está dirigida a mejorar el Estado, a volverlo más eficiente, en sus dos dimensiones: institucional y cívica. En su dimensión institucional hablamos del estado de derecho, del respeto a la ley, de la garantía de los derechos fundamentales, del acceso de todos a la justicia, del respeto a la división de poderes. En su dimensión cívica hablamos de una relación de pertenencia, el Estado como unidad de representación, de un Estado en el cual los ciudadanos se reconozcan y se respeten los derechos individuales.

Estamos empeñados en construir un Estado eficiente y a la vez amable, capaz de impulsar con rapidez las políticas públicas, pero también de construir un trato cordial con los ciudadanos. Un nuevo trato que le permita al Estado renovar en el día a día su legitimidad, erradicando la arbitrariedad del poder y recuperando la autoridad necesaria para transformar la sociedad.

Para esto resulta imprescindible revertir la degradación de la calidad de las instituciones estatales en nuestra provincia, promoviendo las reformas necesarias de los dispositivos institucionales. El Estado que necesitamos los santafesinos debe ser un buen reflejo de la pluralidad y heterogeneidad de nuestra sociedad. Hay que superar el temor a la diversidad que caracteriza a la actual institucionalidad: lo heterogéneo, lo diverso, lo plural, no es un defecto; por el contrario ha sido y es uno de los mejores rasgos de la cultura argentina. Es hora que el sistema político y las instituciones estatales acepten esta realidad de nuestra sociedad y no la contradigan desde el temor.

El nuevo trato que proponemos necesita de un formato estatal permeable a la sociedad civil. La descentralización estatal y la jerarquización de la esfera de lo público no estatal, permitirán responder positivamente a la actual crisis de la democracia representativa, avanzando en la construcción de una democracia participativa de calidad.

La experiencia de gobierno en la ciudad de Rosario nos ha permitido poner en acción el concepto de democracia de proximidad que destaca el rol de los gobiernos locales para la profundización de la democracia. La democracia de proximidad aparece como el punto de encuentro entre la democracia representativa y la participativa, es allí donde puede encontrarse la sustancia misma de una democracia a tono con los tiempos que vivimos. Instrumentos caros a la democracia de proximidad, como la descentralización administrativa y el presupuesto participativo, son buenos ejemplos de la línea de diálogo que se puede establecer entre participación y representación, lo que nos ha permitido dar un notable salto de calidad en la gobernanza local.

La escala provincial es compatible con el desarrollo de una práctica de democracia de este signo, que capitalice las experiencias municipales, proyectándolas en el horizonte más amplio de lo provincial. Para eso es necesario construir una nueva ingeniería institucional, como la que ya estamos poniendo en marcha en la provincia con la organización territorial a partir de regiones y nodos; organización que acerca el gobierno provincial a los gobiernos municipales y comunales, y a la vez estrecha los vínculos entre el Estado y la sociedad civil.

Esta ingeniería institucional nos ayudará a jerarquizar lo público, como ámbito común, lugar de deliberación y actuación colectiva. La necesidad de jerarquizar lo público se acrecienta en la época que vivimos por la debilidad de las instituciones estatales en especial de los cuerpos deliberativos y de los partidos políticos; debilidades que en un juego de espejos se refuerzan mutuamente.

Si la debilidad de las instituciones estatales afecta las posibilidades de la acción gubernamental, la crisis de las organizaciones partidarias deja al sistema democrático sin la posibilidad de disponer de comunidades de ciudadanos construidas a partir de la sensibilidad cívica. La necesidad de contar con organizaciones políticas modernas y relegitimadas es imprescindible, si de lo que se trata es de construir un nuevo y mejor Estado en una sociedad justa.

4. Partido y coalición de gobierno

Como se ha dicho muchas veces, los partidos políticos son imprescindibles para la organización de un sistema democrático. Ellos permiten reunir, asociar, a un conjunto de ciudadanos a partir de ideas y referencias ideológicas e identitarias, que los organizan como un colectivo social no a partir de los intereses particulares sino de una propuesta general de organización de la sociedad.

La necesidad de contar con un Partido Socialista fuerte y renovado es imprescindible, pero con el partido solo no alcanza. La agenda progresista es de una envergadura y complejidad que vuelve necesario la construcción de instrumentos organizacionales igualmente complejos, capaces de dar mejor cuenta de la diversidad y heterogeneidad de la sociedad contemporánea.

Esta tarea también la hemos comenzado ya en Santa Fe con la construcción del Frente Progresista Cívico y Social que nos permitió alcanzar la gobernación de la provincia.

4.a. La crisis de los partidos

Es conocida la crisis que viven los partidos políticos especialmente en la Argentina de los últimos años. La dureza de esta crisis se explica por la coincidencia de factores de distinto tipo

que se refuerzan entre sí. Por un lado, factores de larga duración, que dan cuenta de una crisis de época; por otro, factores más coyunturales y locales, que remiten a la crisis de la representación que tuvo su epicentro en el 2001.

El partido político como forma de organización colectiva tiene más de 100 años de antigüedad. Desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX fue el instrumento que permitía reunir a los ciudadanos a partir de un conjunto de ideas y propuestas más o menos elaboradas para la sociedad, construyendo a la vez una identidad común, un nosotros, que diferenciaba a los integrantes del partido de los que no lo eran.

La sociedad contemporánea es tan diferente a aquella de fines del siglo XIX cuando surgieron los partidos, o a la de mediados del siglo pasado cuando los partidos se transforman en verdaderas organizaciones de masas, que lo extraño sería que los partidos no tengan en la época que vivimos serias dificultades de adaptación. En esta sociedad de comienzos del siglo XXI, enmarcada en el desencantamiento de la política y la crisis de los Estados nacionales, no es sencillo definir el sentido y la funcionalidad de los partidos políticos.

Por otra parte, este fenómeno epocal que obviamente trasciende las fronteras nacionales, se refuerza en nuestro caso argentino por la crisis de representación política que alcanzó su punto culminante en el 2001/2002. Las dificultades de la democracia argentina y de los partidos que la animan desde diferentes roles, para evitar el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, lo que en clave de Norberto Bobbio podríamos denominar «las promesas incumplidas de la democracia», encontró un punto terminal en la crisis que llevó a la caída de De la Rúa. La erosión de credibilidad pública sufrida entonces por los partidos, los políticos y la política misma, resultó inédita y aún no han terminado de cerrarse las heridas que se abrieron entonces.

A pesar de este verdadero terremoto que han atravesado los partidos políticos argentinos, su lugar en el universo de lo político sigue resultando imprescindible y continúa reclamándose su adecuación y fortalecimiento. Apenas se avanza en el proceso de reconstrucción de instrumentos del Estado, se hace más notable la ausencia de los partidos, su debilidad, su incapacidad para ofrecer al gobierno cuadros políticos técnicamente preparados, etc. Ese espacio vacante dejado por las organizaciones partidarias en los últimos años, no ha sido ocupado satisfactoriamente por otras instituciones, lo que explica que hoy vuelva a insistirse con la importancia de recuperar los partidos para mejorar el sistema democrático.

Reconocida la necesidad de las organizaciones partidarias, es oportuno recordar que la crisis de los partidos no se debe sólo a situaciones coyunturales. Hay también, como ya anticipamos, un problema de época. En las sociedades occidentales de las últimas décadas, la crisis de los partidos refleja las dificultades que tienen para representar, desde ese formato organizacional, la heterogeneidad y diversidad de la sociedad contemporánea y dar cuenta de la diversidad de problemas que la caracterizan.

4.b. El Socialismo del siglo XXI

Si reconocemos que los partidos son hoy imprescindibles para mejorar el sistema democrático, es necesario decir enseguida que sólo seremos fieles a nuestro tiempo en la medida que actualicemos nuestro pensamiento y nuestras prácticas para interpretar correctamente los cambios profundos de la sociedad actual. En consecuencia resulta fundamental que nuestro partido se ordene a partir de dispositivos organizacionales que den cuenta de la multiplicidad y diversidad de la sociedad y permitan integrar esa diversidad en una unidad a partir de una fuerte institucionalidad democrática. Esta institucionalidad democrática debe tener la fortaleza suficiente para permitir el procesamiento de los conflictos que han de acompañar a una representación múltiple de la heterogeneidad social; y construir así, a partir de decisiones partidarias consensuadas, una cultura política de la organización que nos permita superar definitivamente el sino histórico de la ruptura y la fragmentación.

La historia de nuestro partido desde sus inicios a fines del siglo XIX está marcada por estas rupturas que empobrecieron a la organización. Antes, las diferencias conducían al fraccionamiento y la ruptura. Hoy, aprendiendo de nuestra historia, el partido debe expresar su vocación democrática en sus reglas de funcionamiento interno. Reglas capaces de procesar las diferencias, conteniéndolas e interpretándolas como parte del colectivo partidario.

Tal vez lo más grave de esta historia de fraccionamientos y rupturas fue la progresiva ajenidad entre la tradición del pensamiento socialista y los sectores populares de nuestro país, que buscaron en otras fuerzas su proyección política. Hoy es necesario reconstruir un pensamiento, una representación socialista de la Argentina y en especial del futuro de la Argentina, que sea capaz de atraer a esos sectores sociales e involucrarlos en un proyecto de construcción de una sociedad basada en la libertad, la justicia y la solidaridad.

Esta historia de desencuentros ha comenzado a cambiar hace unos años y hoy estamos en una situación diferente. La reunificación de las fuerzas partidarias ha generado una nueva situación en la esfera nacional, y nuestra práctica política ha encontrado, a partir de la experiencia de gobierno en la ciudad de Rosario primero y hoy en la provincia de Santa Fe, una posibilidad prácticamente inédita en nuestra historia.

Para fortalecer el partido, los socialistas contamos con toda una tradición nacional e internacional a la que recurrir. Tanto en el territorio de las ideas como en el plano organizacional hay ahí sobrados antecedentes. Tenemos mucho para aprender de los partidos socialistas hermanos de Europa y de los países vecinos de América Latina, a la hora de pensar en la organización partidaria, la estructura de cuadros internos, la formación política de la militancia, las modalidades de interpelación a la sociedad, etc.

En última instancia, se trata de dar cuenta de un interrogante que para todos nosotros tiene un significado especial: qué significa hoy, en la Argentina del 2008, ser socialista? Un interrogante permanente sobre la identidad, que atraviesa a toda fuerza política, y que es tarea prioritaria de la organización partidaria canalizar y potenciar a fin de repensamos a nosotros mismos y revisar el lugar que ocupamos en la sociedad.

La respuesta a esta pregunta por la identidad debe comenzar a elaborarse como una tarea colectiva capaz de movilizar a la organización. Aquí sólo enumeraremos algunos componentes que no deberían faltar en la respuesta al interrogante planteado. La mayoría de ellos, remite a la tradición socialista que hay que convocar para reafirmar la identidad; otros se desprenden de mirar con atención experiencias similares de países vecinos como Chile y Uruguay. Un primer componente para responder a la pregunta por la identidad socialista hoy, es la institucionalización partidaria. Desde su origen en la Argentina de fines del siglo XIX, el Socialismo se caracterizó por ser una organización con una elaborada institucionalidad. Una organización que, más allá de los liderazgos personales, obedece a reglas que regulan su actividad. Esa institucionalidad debe garantizar hoy los procedimientos democráticos en la toma de decisiones, a fin de alcanzar los consensos necesarios para no resentir la diversidad interna. Es decir, la institucionalidad partidaria va de la mano con el funcionamiento de una eficiente democracia interna, que ponga a la organización en sintonía con lo que como socialistas proponemos a la sociedad en su conjunto.

Un segundo punto a tener en cuenta, es el contenido programático del partido. Esto es, el Socialismo fue y debe ser una organización que recorta su identidad partidaria en el horizonte político argentino a partir de un programa de ideas que presenta a la sociedad como propuesta para transformar la realidad. Un partido programático. A su vez, este Programa que el partido presenta a la sociedad se inscribe en un mundo de ideas, más vasto y complejo, que se nutre de la tradición socialista universal, y en el que se socializan los cuadros partidarios apuntalando la identidad colectiva de los integrantes.

Un tercer componente partidario es que el Socialismo es y debe ser el partido de la ética y la honestidad. Históricamente así fue identificado el Socialismo en la Argentina y la experiencia gubernamental en Rosario en estos años viene a renovar y confirmar esta imagen partidaria en la sociedad.

Un cuarto componente es que el Socialismo es el partido del cambio social. Esto es, el Socialismo se ha presentado en la historia como el abanderado de una transformación de la sociedad a favor de los sectores medios y populares. Para este cambio es imprescindible contar con un Estado eficiente, exigente consigo mismo, capaz de ponerle límites al mercado para orientar el desarrollo económico en beneficio del conjunto de la sociedad, eliminando la exclusión social y promoviendo una sociedad de bienestar. El Socialismo de hoy no puede aceptar la sociedad de mercado que propone el neoliberalismo; y aunque ha sabido conciliar su proyecto de sociedad con una economía de mercado, no ha abandonado su expectativa de construir una sociedad sobre parámetros no capitalistas.

Un quinto elemento que define nuestra identidad, es que el Socialismo es y debe ser el partido de la libertad y la solidaridad. Dicho de otra forma, su principal bandera pasa por la construcción de una sociedad justa, capaz de conciliar los principios de inclusión social, igualdad y solidaridad, con la libertad en el sentido más amplio y múltiple que tiene hoy el concepto. Una sexta cuestión que destacaremos para considerar como parte constitutiva del Socialismo de hoy, es la necesidad de afirmar una identidad partidaria que se presente como una alternativa a la sociedad. Es decir, es necesario superar las tendencias a lo meramente testimonial y construir una organización que aun en la hora de la oposición se presente a la sociedad como una alternativa de gobierno.

Estos componentes son sólo una parte de la identidad socialista que es necesario repensar. A ellos debemos sumarle un componente deseable para el Socialismo de hoy, pensando en las formas de gobernar esta sociedad compleja y, en consecuencia, en la necesidad de ir más allá de las fronteras partidarias para construir estructuras coaligadas con otras fuerzas partidarias.

4.c. Partido y coalición de gobierno

Hoy el Socialismo tiene la oportunidad histórica de gobernar la provincia de Santa Fe. Esa práctica gubernamental se da en el marco de una coalición: el Frente Progresista Cívico y Social. Es esta práctica la que nos confirma una doble necesidad organizacional: la de fortalecer el Partido Socialista y, a la vez, la coalición de gobierno en la que nuestro partido cumple un rol central. Dicho de otra manera, el partido es fundamental pero para gobernar debe promover estructuras institucionales más amplias y complejas que permita sumar fuerzas políticas afines a partir de un programa consensuado de gobierno.

Las experiencias vividas en países vecinos, con la Coalición que reúne en Chile a Socialistas y Demócratas Cristianos, y el Frente amplio que en Uruguay suma fuerzas aún más diversas del campo progresista, son experiencias que debemos tener en cuenta sobre todo para pensar en la institucionalidad necesaria de nuestra coalición, que en el territorio provincial santafesino es hoy el Frente Progresista Cívico y Social que integra a nuestro partido con el Radicalismo, el ARI, la Democracia Progresista y otros sectores políticos y sociales.

La todavía breve experiencia en el gobierno santafesino reafirma la convicción previa que guió la construcción del Frente Progresista, y que consideraba esa construcción política como algo clave, prioritario y decisivo, para la campaña y para gobernar luego. Es decir, la construcción frentista no debe ser algo coyuntural ni agotarse en una mera estrategia electoral; por el contrario se trata de un principio del partido socialista. El Frente, a su vez, a medida que logra sus fines, debe fomentar el fortalecimiento de los partidos que lo integran. Por ello es necesario dotarlo de recursos institucionales que ordenen su funcionamiento y que sea cada vez más democrático en su accionar.

Para una fuerza partidaria la organización política define un nosotros a partir de elementos de identidad común sostenidos en principios, ideas, creencias, etc. La construcción de un Frente en cambio, no se sostiene en la cuestión identitaria, sino más bien en la coincidencia en torno a una propuesta de gobierno.

En Santa Fe, el Frente Progresista es un instrumento colectivo construido por los santafesinos para hacer posible la transformación de nuestra provincia. En la definición de principios del Programa presentado a la sociedad, se sostiene que quienes participan de esta experiencia sustentan una concepción pluralista de la democracia y del diálogo cívico, en cuyo marco se pueden procesar los conflictos, y aspiran a una sociedad de un mayor contenido humano, más solidaria, más justa. Una sociedad que trabaje por la igualdad reconociendo las diferencias y la diversidad, y reafirmando la prioridad de los derechos humanos que demanda nuestra historia. El carácter progresista del Frente implica el compromiso de cambiar la sociedad, rechazando el pensamiento conservador que define la política como conciliación de los intereses tal cual existen, y proponiendo en cambio reformular esos intereses existentes y reorientarlos en función de un proyecto de mejora de la sociedad.

El Frente Progresista, asimismo, puede ser un marco para desarrollar otras expresiones políticas más allá de los partidos. Al estilo del Diálogo Argentino, con una metodología que facilite pensar la Argentina en su complejidad, para lo cual es necesario hacer una convocatoria amplia a la sociedad civil.

5. Epílogo: recuperando la política

Estamos convencidos de la necesidad de consolidar el desarrollo de nuestra organización partidaria, en tanto el Socialismo tiene aún mucho por decir a la sociedad argentina. A su vez, el partido puede y debe ocupar un lugar central en el proceso de construcción y afianzamiento de instrumentos más amplios de organización política, que reúnan a fuerzas aliadas en torno a una propuesta de gobierno en un Frente político al que es necesario dotar de institucionalidad para optimizar las posibilidades de gobernar.

Desde esos dos lugares institucionales, Partido y Frente Progresista, el Socialismo puede proponer a la sociedad en su conjunto un proyecto sugestivo de vida en sociedad basado en el respeto. Una sociedad basada en el respeto no es poca cosa: implica por ejemplo un piso mínimo de igualdad para todos los ciudadanos.

Los socialistas sabemos que el deterioro del Estado, de la política y de los partidos que hemos sufrido en los últimos años, favorece a los sectores más concentrados de la economía, que a su arbitrio pueden tomar decisiones que afectan a toda la sociedad. Precisamente por esto estamos convencidos que es imprescindible recuperar para la política la dignidad perdida en estos últimos años. Que la política recupere de la mano del fortalecimiento del Estado la capacidad para ponerle límites al interés particular del capital, es de por sí importante. Pero más aún, si pensamos en los aspectos más profundos de la crisis de nuestra sociedad contemporánea, la política puede ser un instrumento formidable: puede ser el lazo laico que reúna las partes de esta sociedad fragmentada devolviéndole sentido a la sociedad como un emprendimiento colectivo.

Recuperar para la política ese lugar central en la sociedad es una tarea vital que los socialistas debemos asumir como propia. En ese camino debemos reafirmar ante la sociedad argentina el compromiso asumido con la sociedad santafesina como integrantes del Frente Progresista. Un compromiso que se reconoce en tres demandas éticas que encauzan y definen el sentido del pensamiento progresista en la Argentina de hoy: la ética del cambio, que impulse la transformación de nuestra sociedad; la ética del diálogo, que promueva la participación pluralista y la construcción de consensos para la toma de decisiones; y la ética de la legalidad, con el sometimiento a la ley como fuente de legitimidad y a fin de erradicar la arbitrariedad del poder.